

# Grave deforestación por el narcotráfico

## Peligra la selva amazónica peruana

**D**E LIMA: Los efectos devastadores que causa la industria del narcotráfico en Perú no pueden ser peores: cientos de miles de hectáreas de bosques en la selva amazónica peruana son taladas sistemáticamente y los residuos de los químicos empleados para la elaboración de la pasta básica de cocaína (PBC) han exterminado varias especies de peces y plantas acuáticas del río Huallaga.

Se estima que en la región hay 200 mil hectáreas sembradas con plantas de coca, terrenos que años atrás fueron bosques vírgenes. A la deforestación se le suman las tierras que los cocaleseros utilizan para su sustento, las que abandonan por agotamiento de la fertilidad, las que deforestan los campesinos que se ven obligados a alejarse de las zonas dominadas por los narcotraficantes, las tierras deforestadas para la construcción de "secaderos" de hojas de coca y más de un centenar de pistas de aterrizaje donde descienden avionetas colombianas a comprar la PBC. Estas ascienden a la alarmante cifra de 700 mil hectáreas deforestadas, mutilando la fuente de oxígeno más grande de Sudamérica.

Los efectos se dejan sentir en las graves alteraciones ambientales: pérdidas de suelos por efecto de la erosión, extinción de recursos genéticos, alteraciones en los regímenes hidrológicos, reducción del potencial hidroenergético. También en la reducción de los recursos hidrobiológicos: los nativos se quejan de no tener carne de monte para su sustento, y otros problemas "menores" como la contaminación del aire.

La cadena de destrucción de la ecología en la zona cocalera por la mafia del narcotráfico, es seguida por la elaboración de la PBC. Cabe señalar que si bien se produce en la selva peruana el clorhidrato de cocaína, es en una mínima escala a comparación de Colombia, donde se encuentran los laboratorios de las grandes mafias del cártel de Medellín.

El gobierno peruano, alarmado por el continuo crecimiento de las plantaciones y por los escasos resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico decide, en 1981, suscribirse a diversos convenios de préstamo y donación con el gobierno de Estados Unidos, principal país afectado por el consumo de cocaína.

Entonces se constituyeron el Proyecto de Reducción de Cultivo de la Coca (CORAH), el Proyecto Especial del Alto Huallaga (PEAH) y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR). Las tres entidades tenían la misión de erradicar los cultivos de coca, sustituyéndolos por otros lícitos como el café, cacao, frijol, plátano, etc.

El CORAH brindaba el apoyo técnico de la erradicación. El PEAH, perteneciente al Ministerio de Agricultura peruano, daba el apoyo crediticio para la sustitución por cultivos lícitos, y el UMOPAR estaba a cargo del apoyo policial que requería el CORAH y de la represión del comercio ilícito de la hoja de coca, pasta básica y narcotráfico.

Los resultados no fueron los mejores. Desde 1981 hasta la fecha, mientras las plantaciones de coca aumentaron vertiginosamente, el CORAH sólo pudo erradicar el cinco por ciento de las hectáreas existentes.

La falta de cultivos sustitutos, la presión de los narcotraficantes, la reducida acción policial y la poca rentabilidad de los cultivos lícitos fueron los motivos para su fracaso. En términos económicos, el agricultor recibe anualmente 4.500 dólares por hectárea de coca, mientras que con cualquier cultivo lícito a lo mucho llegaría a obtener 600 dólares por hectárea.

Es, indudablemente, la rentabilidad de la coca el gran impedimento en detener a todos los eslabones del narcotráfico. Estimando un promedio de tres dólares por kilogramo de hojas de coca, la producción anual peruana tendría una rentabilidad de un billón y medio de dólares.

Dada la imposibilidad de erradicar manualmente las 200 mil hectáreas surgió la idea de encontrar un herbicida que, rociado desde el aire, elimine los cocales sin dañar al resto de la vegetación.

La compañía Eli Lilly propone con absoluta reserva al gobierno norteamericano, el uso de herbicida *tebuthiuron*, también llamado *spike*, encargado de ingresar por las raíces a la savia del arbutto de coca, eliminando la capacidad de fotosíntesis de la planta.

Debido a unas pruebas experimentales que vienen realizándose en la región

cocalera —sin contar con la aprobación del Ministerio de Agricultura peruano—, el nombre del herbicida no tardó en trascender. Inesperadamente, Elanco Products Company, subsidiaria de Eli Lilly Company, decidió retirar su participación en el programa suspendiendo la venta del químico a su gobierno, seguramente temiendo afrontar futuros juicios por consecuencias no previstas a la salud y a la ecología.

El dirigente ecologista Jay Felman declaró recientemente en un programa televisivo referente al uso del herbicida: "ello sería igual que arrojar una bomba atómica en la zona. Estamos hablando de una sociedad agraria que depende de la tierra para su subsistencia y, si destruimos su base agrícola, no podemos promover el desarrollo económico con cosechas de productos legales".

Hasta el momento el presidente peruano, Alan García Pérez, estaría de acuerdo con el uso del herbicida, según el convenio acordado con el secretario de Justicia norteamericano, Edwin Meese, en su gira sudamericana el pasado abril. El plan contempla el uso del herbicida para Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.

De llevarse a cabo el uso del herbicida, el proyecto de dos años de duración estaría presupuestado en 116.900 millones de dólares. Si esta campaña de erradicación masiva no es acompañada de un desarrollo integral del área, se correría el riesgo de que la coca se convierta en un cultivo itinerante. (Verónica Sáenz P.) ■

AP/Laserphoto



Ya son 700 mil hectáreas devastadas